

HONDURAS: DEL GOLPE A ZELAYA A LA POSIBLE RUPTURA DEL BIPARTIDISMO.

Esteban De Gori*

Resumen

El trabajo se propone analizar, por un lado, la dinámica política y la propuesta gubernamental que suscitó el liderazgo inesperado de Manuel Zelaya y, por otro, los diversos repertorios de acción que provocaron o resistieron el Golpe de Estado de junio de 2009. Específicamente, nos centraremos en el análisis de los discursos que los actores esgrimieron para legitimar o deslegitimar el Golpe de Estado. Entendemos, que en la interpretación de los discursos, como en sus mutaciones, podrían encontrarse algunas claves para interpretar los diversos cursos de acción, como el surgimiento de una nueva escena discursiva vinculada a la afirmación de un nuevo actor. En este caso, analizaremos la utilización (reactualización) del formato discursivo de la Doctrina de Seguridad Nacional para explicar el gobierno de Zelaya y su propuesta democrática, su efectividad e inclusive su crisis. Crisis, que remite a la misma estrategia de los partidos y sectores tradicionales desde el periodo de la “transición a la democracia”.

El trabajo se realizará desde una perspectiva interpretativista, la cual, no solo analizará los cursos de acción, sino los sentidos referenciales y performativos de los discursos. En este sentido, se utilizarán documentos, entrevistas, panfletos, etc. para componer las escenas discursivas que se producen durante el golpe de Estado y afirmación del Frente Nacional contra el Golpe de Estado (y, luego Partido Libre)

* CONICET / Grupo de Estudios sobre Centroamérica, Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.

HONDURAS: DEL GOLPE A ZELAYA A LA POSIBLE RUPTURA DEL BIPARTIDISMO.

“Existe la conciencia general de que no es posible un golpe de Estado. La actitud de los Estados Unidos –y lo digo en elogio a esa nación-, en los casos e Haití, de Guatemala y Paraguay, demuestra de manera elocuente que ya no hay espacio para golpes de Estado y que hay que respetar los procesos electorales”.

Roberto Reina (Presidente de Honduras entre 1994-1998)

Introducción

En este trabajo nos proponemos comprender el golpe de Estado contra el gobierno constitucional de Manuel Zelaya, así como los contextos y las diversas trayectorias de los actores que forzaron su salida del gobierno. Para ello, trabajaremos desde la perspectiva de los actores involucrados para encontrar algunas claves explicativas, como también reflexionaremos sobre la característica de un golpe donde se derroca y secuestra al Presidente y se mantiene la vigencia del Poder Legislativo y Judicial. Un golpe apoyado por los partidos tradicionales y las corporaciones económicas y militares que habían apostado, desde 1982, por la comunidad de intereses económicos, políticos y sociales del bipartidismo¹.

A su vez, reflexionaremos sobre los sucesos políticos que se construyeron luego del golpe, el Frente Nacional de Resistencia Popular y principalmente la fundación del Partido Libertad y Refundación (Libre), dirigido por Xiomara Castro y Manuel Zelaya. Los cuales, podrían en las próximas elecciones podrían desestructurar el “consenso bipartidista”. De esta manera, podemos esgrimir –que a diferencia de lo sucedido con el presidente paraguayo Fernando Lugo- Zelaya y Castro lograron “acumular”, “capitalizar” y organizar políticamente los descontentos y resistencias que generaron el golpe en una fuerza partidaria con un porcentaje relevante de adhesión social.

Por último, analizaremos el surgimiento del liderazgo de Xiomara Castro y los posicionamientos del Partido Libertad y Refundación.

Mel Zelaya: un liderazgo inesperado

Unos días antes de que Zelaya sea expulsado del poder por los militares hondureños –el día 28 de junio de 2009–, otorgaba el siguiente reportaje al periódico *El País (España)*.

Periodista. ¿Cuál es su modelo?

R (Manuel Zelaya). Mire. *Yo me he ubicado en un centro-izquierda como Gobierno, porque practico ideas liberales, pero con una tendencia socialista, social, muy acercada a integrar al ciudadano a sus derechos.*

P. Pero usted no es un hombre que procedía de la izquierda...

R. Así es, *yo vengo más bien de sectores muy conservadores.*

¹ El bipartidismo hondureño es el más antiguo y más estable de América Latina.

P. Y en qué momento se cae del caballo...

R. Ja, ja... No, más bien, en qué momento me subo al caballo... Mire, yo pensé hacer los cambios desde dentro del esquema neoliberal. Pero los ricos no ceden un penique. Los ricos no ceden nada de su plata. Todo lo quieren para ellos. Entonces, lógicamente, *para hacer cambios hay que incorporar al pueblo.*

P. ¿Cómo le va a cambiar en lo político, pero también en lo personal, los momentos de crisis, vividos en las últimas horas?

R. ...[Manuel Zelaya se queda callado] ¿Qué me va a cambiar? Si salgo fortalecido [en las urnas] este domingo... Quizás tendré que acercarme más a los grupos de poder. Tendré que acercarme más a ellos y convencerles. Decirles que no estoy contra ellos, que esto es un proceso histórico, que tienen que cooperar... Tienen que comprender que la pobreza no se acabará hasta que las leyes no las hagan los pobres.²

El 2 de julio de 2009 el periódico salvadoreño *El Faro* –conjuntamente con el *Miami Herald*- publica un extenso reportaje que al principal asesor jurídico del Ejército hondureño, el **Coronel Herberth Bayardo Inestroza**. **En este indica lo siguiente:**

¿Y qué le respondió?

Él era consciente, pero tenía que esperar a que en determinado momento le dieran las órdenes para tener una suficiente base legal y responder. *Es que no hay que ser tan inteligente para darse cuenta de lo que ha sucedido en Bolivia, Ecuador y Venezuela, para saber qué es lo que viene. En esos países han establecido control sobre el ejército, y controlando el ejército se da lo demás.*

¿Aceptarían un acuerdo político para que regrese Zelaya?

No sabría contestarle, porque no me corresponde tomar esa decisión. Sinceramente... no sé qué se haría. Si eso llega a suceder eso va a ser el principio del fin del Estado de Derecho en Honduras. Porque él no va a cambiar, va a seguir con sus ideas izquierdistas. Él lo tiene claro. Si esa encuesta de opinión se hubiera realizado el domingo, con el resultado ellos legitimaban el proceso, y a las 18 horas del mismo domingo 28 instalaban la Constituyente. Y una vez instalada disolvían el Congreso y la Corte Suprema, destituían al Fiscal General y descabezaban los mandos de las Fuerzas Armadas. Lo mismo se ha hecho en otros lados.

¿Se siente más cómodo el ejército con un Comandante en jefe de derecha que con uno de izquierda?

Nosotros en 1980, yo era subteniente, combatimos los movimientos subversivos acá y fuimos el único país que no tuvo una guerra fratricida como los demás. *Difícilmente nosotros, con nuestra formación, podemos tener relación con un gobierno de izquierda. Eso es imposible.* Yo personalmente me hubiera retirado, porque mi pensamiento, mis principios, no me hubieran permitido comulgar con eso.

¿Y Zelaya no es de izquierda?

Él es de una izquierda de mentiras, porque es un ganadero de la zona sur que ha vivido siempre acomodado. Lo que pasa es que aprovechó la coyuntura de los petrodólares, pero

²El reportaje fue publicado el mismo día del golpe.

http://elpais.com/diario/2009/06/28/internacional/1246140003_850215.html Las cursivas son mías.

está acostumbrado a vivir cómodamente, como un burgués. Desgraciadamente, se había abocado a eso.³

Los reportajes son elocuentes. Están atravesados por la claridad –si se me permite utilizar esta expresión– en la exposición de intereses y concepciones, como por el momento crítico que vive la política hondureña. Aquí podemos observar las reflexiones de los “actores en conflicto”, como así sus explicaciones acerca del sentido que le otorgaron a sus acciones. En realidad, desde una perspectiva weberiana, intentan explicar porque “hicieron lo que hicieron” y ello, no solo para su presente inmediato, sino para un futuro cercano.

Ahora bien, estos actores no son abstractos, uno, es un Presidente constitucional que asumió en el año 2005 y fue derrocado en 2009 y, el otro, el asesor principal del Ejército Hondureño, fuerza que instrumentó y apoyó el golpe de Estado. Ambos actores se inscriben en historias políticas a destacar. Zelaya proviene de uno de los partidos tradicionales históricos de Honduras (Partido Liberal), el cual conjuntamente con el Partido Nacional, organizaron y condujeron la “recuperación democrática” en el año 1982. El asesor jurídico, Coronel Herberth Bayardo Inestroza, proviene de un ejército que se benefició y amplió su poderío durante la lucha contrainsurgente en Centroamérica, que tuteló la “recuperación democrática”⁴ durante la década del 80 y 90⁵ y que luego aceptó someterse a los gobiernos civiles.

Los partidos tradicionales lograron subordinar a las fuerzas armadas en un acuerdo mayor. Es decir, el *bipartidismo*⁶ suponía una comunidad de intereses que oscilaban entre el consenso a las concepciones neoliberales⁷ o libre empresariales de la economía, su dependencia al capital extranjero, hasta el alineamiento a las políticas geopolíticas de los Estados Unidos, lo cual conformaba un bloque de poder que garantizaba gobernabilidad. Mientras esta comunidad de intereses fue administrada por los partidos tradicionales, las fuerzas armadas quedaron relegadas de la resolución de los conflictos entre partidos e

³ http://archivo.elfaro.net/secciones/noticias/20090629/noticias16_20090629.asp Las cursivas son mías.

⁴ Honduras era desde 1981 y después de Costa Rica, el país de la región centroamericana el mayor periodo de gobiernos constitucionales ininterrumpidos.

⁵ Berta Oliva advierte que hasta la década del 90, los militares ejercieron un poder factico en diversas instituciones del Estado.

⁶ Si bien hablamos de bipartidismo y del dominio de la escena por parte de los históricos partidos Liberal [PL] (fundado en 1891) y Nacional [PN] (fundado en 1902), debemos advertir que existen tres partidos más que integran el sistema partidos: el Partido de la Democracia Cristiana [DC] (fundado en 1968), el Partido Innovación y Unidad Social-Demócrata [PINU-SD] (fundado en 1969) y el Partido Unificación Democrática [UD] (fundado en 1994). El PL, como el PN han concentrado en los últimos 25 de años de democracia el 95% de los votos. Hasta ahora y sin considerar la introducción a la escena de los novísimos partido Libertad y Refundación (LIBRE) y el Partido Anti Corrupción (PAC), Honduras es uno de los países en América Latina y Centroamérica con menor volatilidad del voto.

⁷ Es importante graficar lo que implicó el “consenso neoliberal” en Honduras y la región centroamericana. Apertura de la economía a la incorporación de capitales internacionales que fueron al sistema financiero y de servicios, como a la privatización de empresas públicas. Esto produjo una profunda transformación de la estructura económica, el sector terciario (maquilas, servicios y comercio) asumió una importancia relevante en el paisaje social. En las zonas agrícolas, la mayoría de sus productos –que antes se vendían en el mercado interno– se orientaron hacia la exportación, con lo cual, se generó una importante concentración de tierras y una migración hacia las ciudades o hacia el exterior. No debemos olvidar que el 28% del PBI son remesas que provienen del exterior. Este “consenso neoliberal” aumentó la desigualdad social y transformó a Honduras en uno de los países más pobres y desiguales de la región.

instituciones. Cuando esa administración intentó ser desestructurada, reformulada o puesta en cuestión, las fuerzas armadas con apoyos empresariales, clericales y políticos decidieron entrar en escena.

El golpe se construyó. Éste no estaba planeado desde el inicio de su gestión, sino que ésta fue la que estableció una disputa en la cual un conjunto de actores optaron por desconocer la voluntad popular y derrocaron al presidente constitucional. Ahora bien, la mirada no debe colocarse solo en la destitución presidencial y la crisis institucional –lo que generalmente hace la teoría de la “ruptura presidencial” (Llanos y Marsteintredet, 2010), (Linz, 1990)- sino en la dinámica que suscita las disputa entre intereses sociales y políticos en un orden democrático. Porque entendemos, en el caso hondureño, que esa dinámica, a diferencia de lo que plantean Llanos y Marsteintredet (2010: 176), disuelve el *momento democrático o el régimen democrático*, en el mismo instante en que se niega una legitimidad proveniente de la voluntad popular. Ningún golpe se funda en un problema entre instituciones, sino cuando lo que se presenta es un conjunto de intereses y actores contrapuestos que, en algunos casos, utilizan recursos “jurídicos y administrativos” o de fuerza para presionar, condicionar o violentar el cargo de un Presidente constitucional. De hecho, la continuidad del Congreso y del Poder Judicial⁸ no nos habilita a pensar que se mantiene el régimen democrático. Sobre todo, cuando alguno de estos poderes – colonizados por las elites políticas- intentan dirimir una posición política de un apoyo para el derrocamiento del Poder Ejecutivo. Debemos considerar que Zelaya, cuando fue secuestrado por las fuerzas armadas no recibió ni una orden de captura, ni un citatorio judicial para defenderse en un juicio.

Los poderes del Estado en Honduras, sobre todo el jurídico, el legislativo y el militar, fueron “cajas de resonancias” de intereses corporativos e impulsores del golpe, ya que entrevistaron en las propuestas del Presidente un “giro político” que podría impactar en el mundo económico y político, como en la trama de instituciones estatales. De esta manera, el sistema tradicional de poderes, consolidado durante el periodo de la “recuperación democrática” se sacaba de encima a “uno de los suyos”.

Manuel “Mel” Zelaya, como lo plantea en el reportaje que citamos arriba, proviene de los sectores empresariales más acomodados. En 1970 se afilia al Partido Liberal y ocupa diversos cargos políticos. Por lo tanto, es un “hombre de partido”. Se transforma en un hacendado importante y en un integrante de la elite política tradicional. Para muchos empresarios y, sobre todo, para el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Zelaya garantizaría, a partir de su elección en 2005, la continuidad bipartidista y lo que ello implicaba. Los empresarios no tenían elementos para desconfiar de su persona, ya que había sido directivo del COHEP y presidente de uno de los gremios integrados en ésta confederación patronal, la Asociación Nacional de Empresas Transformadoras de la Madera (ANETRAMA). A pesar de que había planteado como ejes de campaña: la lucha contra la pobreza, contra la corrupción y la delincuencia pandillera, nadie pensaba que

⁸ El Departamento de Estado de EEUU en su informe sobre los “Derechos Humanos en Honduras en 2008” había indicado que “aunque la Constitución (hondureña) habla de un sistema jurídico independiente, tal sistema está muy poco financiado con muy escasos recursos, sujeto a una corruptela clientelar y a múltiples influencias políticas. La Corte Suprema nombrada por los dos grandes partidos carece de autonomía y está claramente influenciada políticamente, dentro de una cultura de corrupción”

podría incorporar algunas variantes –sobre todo intervencionistas- al capitalismo hondureño y a una lógica estatal estructurada por décadas⁹.

Este “liderazgo inesperado” –el cual, indica en el reportaje arriba citado que intentaría realizar cambios dentro de esquema neoliberal- surge en el mismo conflicto político que ocasiona la realización de expectativas sociales. De esta manera, la disputa que se produce ante algunas políticas del Poder Ejecutivo abre un momento contingencial que suscita nuevas trayectorias políticas y posibilidades de legitimación. Por lo tanto, el conflicto conduce a Manuel Zelaya a asumir posiciones y alineamientos políticos inesperados para la estructura partidaria de la que provenía, para la percepción de sus pares partidarios y para el “consenso bipartidista”. Desafiar este consenso o ponerlo en duda, suponía –en palabras de Marvin Barahona (2010: 28)- poner en cuestión un “régimen de privilegios, que excluye de su funcionamiento la construcción de una institucionalidad democrática y que, voluntariamente, se coloca al margen de toda legitimidad para ejercer una dominación absoluta en el terreno político, económico y social.” Zelaya no se convierte en una versión de “una izquierda conflictiva”¹⁰ –como entrevió la derecha hondureña- sino que el conflicto lo empuja a tomar ciertas medidas progresistas.

Lo inesperado del liderazgo de Manuel Zelaya está ligado a la resolución de dos crisis significativas con las que se encuentra en su presidencia: la crisis energética y la crisis social. El abordaje de ambas suponían dos trayectorias decisionales: una, mantenerse en el ciclo de políticas excluyentes y neoliberales. En relación a esta trayectoria, el PNUD -en el año 2006- advertía que dicha decisión agravaría el bajo crecimiento per cápita anual y la insatisfacción de necesidades de la población (Fernandez, 2010: 163). La segunda trayectoria implicaba la búsqueda de variantes económicas para aumentar el crecimiento interno y reducir las necesidades básicas. Es decir, recurrir a la intervención estatal para morigerar las crisis. Esta última trayectoria fue la elegida por Mel Zelaya. De esta manera, firmó un decreto de salario mínimo que lo enfrentó a las grandes corporaciones, redujo los costos de los combustibles sacándole el negocio a algunas empresas y contrató a Petrocaribe-ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas). Esta decisión era muy conveniente en términos económicos y permitía, al mismo tiempo, una inscripción política regional. A su vez, se opuso a la privatización de la empresa nacional portuaria, lo que suponía una crítica a las presiones privatistas. En un sentido más amplio, “el gobierno de Zelaya se propuso a través de la estrategia (ERP¹¹), privilegiar el crecimiento pro pobre; es decir, un crecimiento que satisficiera a todos, pero particularmente a los pobres; estimular a los sectores de baja productividad para que logren competitividad, la formalización del trabajo y aumentar los niveles de empleo” (Fernandez, 2010: 167) Entonces, el presidente electo en el 2005, indagó *algunos* repertorios económicos alternativos al “consenso

⁹ Es relevante considerar algunas apreciaciones antes de la asunción de Manuel Zelaya. A fines del año 2004, el 50% de la población hondureña consideraba que la situación económica del país era *mala*; que los problemas económicos (pobreza, falta de empleo, etc.) son los que más preocupan a los hondureños (64%), y que el 72% entiende que el gobierno y las autoridades políticas son las responsables de los problemas del país no porque no puedan solucionarlos, sino porque *no quieren hacerlo* o porque *no les interesa*. Por otro lado, el 22% se manifestaba satisfecho con el régimen democrático (Fernandez, 2010: 169-170).

¹⁰ Término que usa Rouquié (2011: 339) para diferenciarlo de “izquierda consensual”.

¹¹ Estrategia de Reducción de la Pobreza, la cual se elaboró en 2001 y estaba estrechamente vinculada un proceso de la condonación de la deuda externa. Esta estrategia fue implementada en el año 2001. Consistía en que entre 2007 y 2015 se redujera la pobreza a partir de una combinación de crecimiento económico y distribución de la riqueza.

neoliberal”¹² y ello fue creando una escenografía del conflicto muy distinta a la que se perfilaba cuando asumió. 2009, es la condensación de diversos conflictos y tensiones que culminaran en el golpe de Estado. Este fue ejecutado el 28 de junio, el día de la realización de una encuesta nacional donde se buscaba conocer la opinión sobre el establecimiento o no de una constituyente. Es decir, se realizó en momento simbólico-político relevante. Así lo indicaba el asesor del Ejército: “Si esa encuesta de opinión se hubiera realizado el domingo, con el resultado ellos legitimaban el proceso, y a las 18 horas del mismo domingo 28 instalaban la Constituyente.”¹³

Nuestra hipótesis sobre los sucesos de junio de 2009 es la siguiente: el intento de Zelaya por resolver la crisis energética –cosa que lo llevó a vincularse al ALBA, a Petrocaribe y, por ende, a la estrategia bolivariana-, el establecimiento de algunas políticas inclusivas contrarias al canon neoliberal, la desestructuración de una lógica bipartidista iniciada en 1982 y el intento de construir una lógica de legitimación que ampliase su base social y sortee las formas tradicionales de interpelación política condujeron a una articulación de corporaciones empresariales, militares y políticas (fuerzas armadas, partidos tradicionales, consejo empresarial, arzobispado) que avalaron y llevaron adelante el accionar golpista. Ahora bien, existió un motivo que organizó el golpe. Como indican Ansaldi y Giordano (2012: 657-658)¹⁴ y Cáliz (2010: 416), éste fue la realización de una encuesta, el mismo día en que ocurrió el golpe, para conocer si la ciudadanía aceptaba que en las próximas elecciones se les preguntara si estaba o no de acuerdo con la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Senderos hacía un golpe de Estado

Manuel Zelaya¹⁵ arriba en el 27 de enero de 2006 a la presidencia de Honduras con un 23% de adhesión popular¹⁶ (Fernandez, 2010: 174). Esto hablaba a las claras de su “debilidad de origen”, tanto dentro como fuera de su partido, para instaurar diversas políticas. Esta situación, lo llevó a realizar diversos consensos internos, lo cual se expresó en la conformación de un gabinete de ministros con precandidatos presidenciales que habían competido con Zelaya en las primarias o internas del Partido Liberal¹⁷. Inclusive, era tal la debilidad, que los sectores más conservadores del PL lograron imponerle al presidente y vicepresidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti y Mary Elizabeth Flores respectivamente. Esto tuvo un efecto político inmediato, según Fernandez (2010: 174), 62 diputados del PL se transformaron en un poder paralelo al Presidente y se

¹² Como indica Carlos Sojo (1995: 22) en Centroamérica el consenso neoliberal supuso una reforma regresiva del Estado. La política social quedó, mayoritariamente, en manos de la caridad internacional y una reducida élites fue, al parecer, la principal beneficiaria de la gestión pública.

¹³ http://archivo.elfaro.net/secciones/noticias/20090629/noticias16_20090629.asp

¹⁴ Tomamos esta postura estos autores porque entendemos que la encuesta es lo que articula la demanda y presiones de las derechas y partidos tradicionales; a diferencia de Rouquié (2011: 89) que indica que la tentativa del Jefe de Estado de imponer la reelección presidencial provocó el derrocamiento de Zelaya.

¹⁵ Manuel Zelaya expresa a un conjunto de candidatos presidenciales modernos, democráticos y reformistas. De hecho, ante la posibilidad de enfrentarse a candidatos que han reivindicado posiciones autoritarias o conservadoras, siempre han resultado vencedores los primeros.

¹⁶ Gana la elección presidencial en noviembre de 2005. Zelaya vence a Porfirio Lobo, candidato del Partido Nacional, por un estrecho margen de 3.5%. El partido Liberal obtiene 62 de 128 diputados, pero una alianza con partidos menores le permite controlar la presidencia del Congreso. La cual, la obtiene Roberto Micheletti.

¹⁷ Participaron al menos cinco precandidatos presidenciales

“desengancharon” de su influencia política. Es decir, un sector interno de su propio partido intento presionar al Presidente para disciplinarlo y obligarlo a considerar diversas leyes. De esta manera, se inició una tensión entre el Presidente y un sector de legisladores del PL, como con algunos de sus ministros, que buscaban condicionarlo en sus propuestas y políticas. Esta situación fue obligando y empujando al Presidente a buscar apoyos y adhesiones en otros partidos o entre diversos actores sociales. Es decir, la dinámica de conflictividad interna –que era institucional, pero también inscrita en intereses sociales- fue empujando a Manuel Zelaya a buscar otras vías de legitimación y de apoyo para llevar adelante sus políticas. Esto lo obligó a buscar un diálogo con diversos actores sociales que presionaban al Poder Ejecutivo para la realización de demandas concretas (por ejemplo, docentes, médicos y transportistas). Zelaya “sorteo” la búsqueda de consensos entre los partidos y dentro del suyo propio para obtener adhesiones sociales y un mayor poder político para intentar cumplir con sus promesas de campaña. Entre otras cosas, reorientó los fondos del gobierno vinculados a Estrategia de Reducción de la Pobreza y estableció la matrícula gratuita en la educación básica, garantizó el pago de salarios a médicos y maestros, aumentó la fuerza pública, promovió las redes solidarias vinculadas a la ERP y subsidió los combustibles y la energía eléctrica. A su vez, firmó un decreto de salario mínimo que lo enfrentó al poderoso Consejo Hondureño de la Empresa Privada¹⁸ (COHEP), el cual había regulado arbitrariamente y por rama de producción la pauta salarial.

La puesta en práctica de estas políticas, como resolución de conflictos y demandas tenían dos efectos prácticos: morigerar el conflicto social y dotar de una mayor gobernabilidad a una experiencia gubernamental inicialmente débil. De hecho, debe advertirse que durante el gobierno de Zelaya, si bien existieron conflictos gremiales, estos fueron poco frecuentes, sobre todo en el ámbito de la educación y de la salud. De esta manera, su gobierno comenzó a realizar intervenciones –de menor o mayor intensidad- en la economía y a poner en duda la lógica neoliberal que había instaurado una relación arbitraria entre el capital y el sector asalariado.

Entonces, podemos observar que la presión de los sectores conservadores de su propio partido y la aguda crisis social llevó a Zelaya a establecer otras estrategias para ampliar su base de sustentación política. Estableció otro camino al propuesto históricamente por el bipartidismo –en términos institucionales, como ideológicos- y indagó una vía de construcción de legitimidad con actores sociales que presionaban para realizar sus demandas. La construcción de legitimidad social, entre sectores vulnerabilizados por el proyecto económico neoliberal, fue la clave para presentar una lógica de acción alternativa propuesta por los partidos tradicionales.

La búsqueda de una lógica distinta al bipartidismo se fundamentaba en una lectura que el gobierno de Zelaya realizaba sobre la realidad hondureña, de las maneras en que los

¹⁸ El Consejo fue fundado en 1967, representa a la totalidad de las organizaciones empresariales. Según sus estimaciones, el sector privado emplea al 90% de los asalariados totales, mientras que el Gobierno solo ocupa al 10%. Esta concentración de representación y de empleo lo ha hecho un actor poderoso a la hora de negociar, presionar y de imponer políticas económicas a los gobiernos. A su vez, como lo vimos en el caso de Zelaya, mucho de sus empresarios participan de los partidos políticos tradicionales, garantizándoles una estrecha relación con los gobiernos. Como Consejo participa en 89 directorios y comisiones de instituciones públicas, lo que lo introduce en la dinámica política-institucional de manera directa.

partidos habían construido su legitimidad social y de los reclamos que presentaban diversos actores sociales. Es decir, entendía que los estos actores y nuevos movimientos estaban “desenganchados” o desafiados –sobre todo, por la irresolución de sus demandas por el régimen democrático- de las redes establecidas por los partidos políticos, por lo tanto, se debían establecer otras formas de interpelación y de participación. La desafiliación, la crisis social y la presión de sindicatos, actores y movimientos sociales obligaban a la experiencia gubernamental de Zelaya a repensar una forma de articulación entre el Estado y la sociedad, que llevo al presidente a pensar en una reformulación constitucional. Entonces, esta discusión y sus alcances abrían una disputa al interior de las elites gobernantes y, sobre todo, de aquellos actores económicos y militares que se habían beneficiado de las políticas públicas, como del control de los resortes institucionales del Estado hondureño. Manuel Zelaya, de esta manera, amenazaba con quebrar una “estabilidad bipartidista”, que desde 1982, se encontraba inscrita en las reformas que se había propuesto desde los centros hegemónicos y en la articulación de sus corporaciones empresariales y militares en el flujo de las dichas reformas.

Los conflictos entre el Ejecutivo y los poderes Legislativo y Judicial estuvieron atravesados por este temor y por una posible reformulación de políticas públicas que afecten a intereses corporativos.

Otro eje de cambio, que impactó en la tensión entre poderes fue la adhesión a Petrocaribe-ALBA para conseguir menores costos en energía. En 2008, Zelaya y Hugo Chávez Frías firmaron la adhesión e incorporación de Honduras, su gobierno recibe combustible a menores precios que los que ofrecían las históricas compañías norteamericanas, además, obtiene un fondo para la realización de programas sociales. De alguna manera, en el intento por resolver la crisis energética, Zelaya construye un vínculo alternativo a los alineamientos tradicionales de Honduras para proveerse de petróleo. Esta “pequeña” variación en la forma de provisión de combustible abre un haz de conflictos e interpretaciones entre poderes, pero también entre actores económicos y militares que entienden que la política del presidente hondureño comienza a virar hacia “el proyecto bolivariano”.

El Estado hondureño no solo se encuentra inficionado y colonizado por el COHEP, el cual, participa en 89 directorios o comisiones del ámbito estatal, sino por los militares. Estos no solo poseen intereses geoestratégicos, sino económicos. En la década del 90, las fuerzas armadas adquieren la Industria Cementera de Honduras S.A (INCEHSA), la cual, se beneficia con la venta del cemento al propio Estado. A su vez, la cúpula militar dirige la Industria Militar de la Fuerzas Armadas (IMFFAA) y se beneficia con el control y administración, desde 1977, del transporte marítimo y de la marina mercante. Otro negocio relevante en el que participan es en la seguridad privada y en la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones. Inclusive, cobran un dinero importante por trasladar las urnas del día de las elecciones. En relación a los negocios agrícolas, los militares poseen granjas en los departamentos de El Paraíso, Santa Bárbara, Cortes y Olancho, ocupando a 10.000 campesinos. Esta acumulación de tierras para la producción agrícola ha tenido dos consecuencias concretas: una, la articulación empresarial de los militares con las pautas de concentración de tierras y con las lógicas del mercado; dos, el abandono absoluto dentro de las fuerzas armadas de cualquier posición vinculada a la reforma agraria¹⁹.

¹⁹ En 1961, el gobierno de Ramón Villade Morales del Partido Liberal crea el Instituto Nacional Agrario y un año después se promulgo la Ley de Reforma Agraria. Con el golpe de 1963, el gobierno militar de Oswaldo

Los militares, a su vez, se han convertido—durante la década del 90- en fuertes inversionistas, contando en su haber, entre otras empresas, con el Banco de las Fuerzas Armadas²⁰, la Compañía de Previsión y Seguros, la Editorial Zodíaco, la Radio Stereo Concierto, una compañía de tarjetas de crédito, Inversiones Bursátiles Sociedad Anónima, Corporación Financiera Internacional, Agro industrial Vallecito, Funerales San Miguel y hasta un cementerio ubicados en la afueras de Tegucigalpa (Funes h, 2000: 401). De esta manera, podemos observar que si bien durante los años 90 los militares se subordinaron al poder civil, lo hicieron a cambio de profundizar sus roles empresariales, de tal forma, que convirtió a las fuerzas armadas en un actor económico, con la posibilidad de competir con otros actores, como de presionar para seguir tal o cual política económica. En términos, políticos deberíamos agregar otra dimensión y es aquella que nos advierte que el presupuesto otorgado por los EEUU a las fuerzas armadas para la lucha contrainsurgente en Centroamérica²¹, debió ser sustituida por “otros fondos”.

La cultura empresarial de las fuerzas armadas se articuló con una cultura política elaborada durante la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) y su papel en la lucha contrainsurgente en las décadas del 70 y 80. Esta doctrina, no sólo fue aceptada como la forma en que se organizaba la lucha política y militar entre el <capitalismo> y el <comunismo>, sino que para Honduras —como cabecera de la lucha contra las guerrillas- este conflicto constituyó una *posibilidad política* para obtener beneficios económicos, para reforzar sus vínculos con las élites dominantes y, sobre todo, para forjar una idea de nación que excluyese cualquier planteo progresista o reivindicatorio de derechos sociales y ciudadanos. Una particular idea de Nación se reformuló y recreó en momentos de elaboración y predominancia de la Doctrina de Seguridad Nacional, es decir, se establecieron fronteras precisas de esa <comunidad “ideológica” imaginada>. Fronteras, que el asesor jurídico en la entrevista citada arriba, precisa muy bien: “*Difícilmente nosotros, con nuestra formación, podemos tener relación con un gobierno de izquierda. Eso es imposible.*” De esta manera, se expresaba el lugar de “custodia” y garantía de la “unidad nacional” que la DSN le asignaba a las fuerzas armadas y, a su vez, la larga tradición anticomunista sobre la que se articuló dicha doctrina²².

Las fuerzas armadas, no solo mantienen lógicas empresariales, sino que son los “custodios de una tradición ideológica” fundada en la lucha contrainsurgente y reformulada al calor de los planteamientos geopolíticos de los Estados Unidos. Entonces, cuando nos referimos al golpe de Estado a Zelaya, debemos considerar la colonización corporativa del Estado hondureño por parte del COHEP y de las Fuerzas Armadas y además que ambos grupos de intereses se habían transformado, conjuntamente con sectores de los partidos tradicionales, en protectores y garantes de un *status quo* construido en el proceso de recuperación

López Arellano sometido a una fuerte presión popular decide llevar adelante, con relativa eficacia y voluntad, la reforma agraria iniciada por el gobierno anterior.

²⁰ En el año 2003, este banco es adquirido por el hondureño Banco del País (BanPaís)

²¹ Honduras, convertido en una plataforma para las políticas de contrainsurgencia, recibiría de Estados Unidos un presupuesto jamás obtenido en la historia de ese país. La ayuda militar se disparó de U\$S 3,9 millones en 1980 a U\$S 77,5 millones en 1984 reduciéndose en 1989 a U\$S 41,1 millones, a U\$S 2,7 millones en 1993 y a sólo U\$S 425.000 en 1997.

²² Loris Zanatta (2012: 199) indica que la DSN fue bien acogida por los militares y las derechas latinoamericanas “porque expresaba ideas y valores que les eran cercanos, empezando por el anticomunismo y siguiendo por las funciones que les reconocía a las fuerzas armadas en la custodia de la identidad y la unidad de la nación”.

democrática. Es decir, un proceso que articuló y posibilitó “transición democrática” dirigida por el gobierno de Suazo Córdoba (Partido Liberal) con políticas de contrainsurgencia al interior del Estado hondureño²³, como en la región²⁴. En este sentido, “la desaparición forzada de personas como la tortura y la represión podían convivir y articularse con un régimen que intentaba legitimarse a través de las reglas democráticas y constitucionales” (De Gori, 2009: 137). Por lo tanto, la “teoría de las transiciones democráticas” que se centraban en la dicotomía *democracia-autoritarismo*, resultaría insuficiente en Honduras, como en otros países, para pensar procesos políticos donde los actores económicos y militares no se “sometían” mecánicamente a nuevas reglas y contenidos, sino que confluían en un conjunto de acuerdos, concesiones y presiones (internas y externas, fundamentalmente, de EEUU) que forjaron un régimen democrático articulado con prácticas autoritarias y corporativas. Sobre todo, en Honduras donde la recuperación democrática, no contaba entre los *derrotados* a los militares, sino que éstos entraban al orden democrático por presión de los Estados Unidos²⁵ que logró en este país instaurar una democracia formal, tutelada y militarizada con la lucha contrainsurgente.

La década del 80, en la cual se llevó adelante la recuperación democrática, no solo se articuló con la lucha contrainsurgente y las dimensiones que ésta integraba la sistema político, sino que a finales de la década del 90, el acuerdo entre los Partidos Liberal y el Partido Nacional condujo al desmantelamiento del “estado desarrollista” para dar paso al orden neoliberal y a la profundización de la colonización corporativa en el Estado.

Los 90, traían otra novedad, las fuerzas armadas parecían subordinadas al poder civil. Pero a lo que se habían subordinado, como expresamos más arriba, es a la lógica bipartidista, la cual suponía una comunidad de intereses, alineamientos internacionales y de culturas políticas, que se extendía más allá de la alternancia en el poder de “liberales” o “nacionales”.

²³ La represión interna la dirigió el general Gustavo Alvarez Martínez, jefe de las Fuerzas Armadas, entre 1982 y 1984, estudió en la Escuela de El Palomar en Argentina durante la dictadura iniciada en 1976 y conocía todas las técnicas de desaparición forzada de personas. En los primeros veintiséis meses del gobierno de Suazo Córdoba se habían denunciado 128 desapariciones. Con un recurso retórico similar utilizado por los militares argentinos acerca de las desapariciones, el teniente coronel Roman Tábora Bográn advertía que “muchos de los que son dados por desaparecidos los están entrenando en otros países para venir a joder a Honduras”.

²⁴ El acuerdo del Partido Liberal con las Fuerzas Armadas, que suponía un <mayor espacio político para las autoridades civiles y políticas> nuevamente garantizarían un orden duradero que permitiría la presencia de la “contra nicaragüense” en suelo hondureño; desde 1983 del ejército de los Estados Unidos en diversos puntos del país y de soldados salvadoreños, antes enemigos en la llamada “guerra del fútbol”, que se convirtieron en participantes del Centro Regional de Entrenamiento Militar. El presupuesto que recibían las Fuerzas Armadas, directamente de los EEUU, le otorgaba un poder inigualable de las fuerzas armadas frente al poder político. Lo que llevo al presidente Suazo Córdoba a negociar con el General Álvarez Martínez. Operó en esos años el Batallón 3-16, el cual empleaba un *modus operandi* que se asemejaba a las tácticas de los escuadrones de la muerte en Argentina. Los oficiales hondureños que participaban en el Batallón 3-16 no sólo recibieron un extenso entrenamiento militar estadounidense, también eran oficiales que compartían la visión geopolítica de los EEUU.

²⁵ Matias Funes h (2000:306) indica que a Estados Unidos le convenía presentar a nuestro país como una especie de <vitrina democrática> que contrastara, aunque fuera por vía de las simples formalidades, con las tendencias “totalitarias” que ya sentaban su reales en el istmo centroamericano. El general Policarpo Paz Garcia, el 24 de febrero de 1980, se entrevistó con Jimmy Carter y se comprometió a garantizar elecciones limpias, a que ningún militar sea postulado para la presidencia de la república y a que ocuparía este cargo quien fuera ungido por el voto secreto y directo de los hondureños.

En este “sistema”, que es más complejo que hablar solo de “sistema neoliberal” en Honduras, se incorpora Manuel Zelaya cuando triunfa en la elecciones presidenciales y es ante el intento de construir una alternativa o una variación política y económica a dicho sistema es que se articula el “consenso bipartidista y corporativo” para destituirlo.

Las políticas sociales de Zelaya, su vinculación con el ALBA y con la estrategia bolivariana y la búsqueda de una reforma constitucional que diseñe un nuevo pacto societal y estatal fue comprendido por el COHEP y las Fuerzas Armadas como una redefinición de “las reglas” planteadas desde la “recuperación democrática”. El conservadurismo político diseñó una estrategia de erosión y deslegitimación, primero desde el ámbito parlamentario y judicial y, luego, apelando a las fuerzas militares. De esta manera, estas recuperaban el lugar de arbitrio y de “fiel de la balanza” en el sistema político.

Entonces, podemos decir que si bien un liberal como Suazo Córdoba en 1982 dirigía la “recuperación democrática” con la aceptación de una tutela militar fundamentada en la lucha contrainsurgente y con la formulación de una reforma constitucional; otro liberal, como Zelaya viene a “patear el tablero” –con diversas intensidades- de un sistema político articulado y colonizado por la trama de poderes económicos y geoestratégicos que se habían coaligados desde inicios de la década del 80 y que se habían modelado con el proyecto neoliberal. El conflicto que abren las políticas de Manuel Zelaya atravesará todas las instituciones estatales y sus poderes. Tomará tal dimensión, que se producirán –al mismo tiempo- dos “destituciones”: una, por parte del Parlamento y del poder judicial que se “sacaran de encima” al Jefe de Estado elegido democráticamente y, dos, por los militares que harán lo propio con el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, garantizado por la Constitución y el voto ciudadano.

A su vez, el golpe contó con el apoyo del Arzobispo de Tegucigalpa, Oscar Rodríguez Madariaga²⁶, el cual le solicitará a Manuel Zelaya que no retorne desde Costa Rica para no provocar “un baño de sangre”. La Conferencia Episcopal de Honduras, con previo aval del Vaticano, emitió un comunicado que no impugnaba el golpe de Estado. Cuando el 16 de julio de 2009, el periodista de La Vanguardia (España), Joaquim Ibarz, le pregunta al Arzobispo acerca a qué atribuye el cambio de Zelaya, responde “Fue Chávez, fue Chávez.” Y en otra respuesta indica: “El presidente de Venezuela buscaba controlar Honduras a través del continuismo del mandato de Zelaya”²⁷.

De esta manera, Chávez y su proyecto bolivariano de integración regional se habían convertido en un “significante” utilizado por militares, empresarios y clérigos para reactualizar una formación lexical y discursiva modelada por la Doctrina de Seguridad Nacional, la lucha anticomunista y el proyecto hegemónico de los EEUU para Centroamérica. De esta manera, se reactualizó un imaginario político y se “trabajó” para deslegitimar a Zelaya.

Zelaya, Petrocaribe y la cuarta urna.

Zelaya, pese ser un empresario y miembro del establishment, fue acentuando en el transcurso de su mandato sus posicionamientos progresistas²⁸. Si bien muchos lo incluían

²⁶ Arzobispo que en los últimos tiempos era nombrado como un candidato a Papa.

²⁷ <http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2009/07/12/pagina-13/78460042/pdf.html>

²⁸ Debemos indicar que en el Partido Liberal existen tradiciones en pugna. Pese a que en los últimos años los sectores conservadores han ganado terreno, no debemos olvidar que existen en su interior sectores y legados

en este campo al interior del Partido Liberal, las crisis energética y social lo empujaron a profundizar dichas perspectivas y a formular salidas inesperadas. Existieron gestos simbólicos y políticas públicas que dieron cuenta de ello. Entre los primeros, deben destacarse la participación de Zelaya en el 28° aniversario de la Revolución Sandinista en Managua (julio de 2007), conociendo que Honduras había sido una plataforma importante en el entrenamiento de la “contra nicaragüense”. Estar allí, de alguna manera, impugnaba la participación del Estado hondureño, y específicamente a las Fuerzas Armadas, en las políticas de contrainsurgencia.

Entre las políticas públicas, debemos detenernos en la vinculada a los combustibles. Zelaya, a fines de 2007, intentó buscar una alternativa a las condiciones y a la oferta de petróleo que imponían las multinacionales. Esto lo condujo a unirse a Petrocaribe. De esta forma, se producía una ruptura con los poderes económicos que habían condicionado por décadas el precio del petróleo. En agosto de 2008, Zelaya dispone una medida mucho más audaz: se vincula al ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas) y logra conseguir, de una manera por demás conflictiva, los votos para lograr dicha adhesión. Ésta se consiguió por el apoyo de partidos menores (Unificación Democrática, Innovación y Unidad Social Demócrata y la Democracia Cristiana) que garantizaron sus votos frente al rechazo unánime del Partido Nacional.

La votación de la adhesión fue un éxito, pero esto le permitió a Zelaya observar como el Parlamento se presentaba como un “poder” autonomizado de su estrategia y, a su vez, conducido por los sectores más conservadores del Partido Liberal. De hecho, algunos analistas supusieron que Roberto Micheletti había conseguido los votos de la bancada liberal por un prometido apoyo del presidente a su candidatura presidencial en las elecciones primarias.

La adhesión al ALBA provocaría apoyos y controversias. Entre los primeros, debe contarse el apoyo del histórico dirigente sindical, Carlos Humberto Reyes, del sindicato de las bebidas (STIByS), el cual indicaba que lo sucedido con la votación “es un triunfo político, aquí lo importante es que estamos buscando el camino correcto, el camino de la integración, el único camino que nos puede llevar a tratar con Estados Unidos y Europa de tú a tú.”²⁹

Entre los opositores a la adhesión al ALBA, se encontraban el Partido Nacional, algunos empresarios vinculados al suministro de petróleo de las multinacionales y, fundamentalmente, a los grupos mediáticos que comenzaron a crear “un clima” donde indicaban la influencia de Chávez sobre Zelaya y la intención de perpetuarse en el poder³⁰. De esta manera, los medios de comunicación³¹ comenzaron a “jugar su partida” de desgaste, como también la fue iniciando el Arzobispado de Tegucigalpa.

progresistas. Para entender esto es interesante observar la reflexión que realiza en 1996, el presidente liberal Roberto Reina (1996): “Pero la actitud del Partido Nacional, del partido conservador de Honduras ha sido más que nada apearse a los poderes reales en toda la historia de Honduras, primero al poder colonial y clerical, después a los consorcios bananeros y después a las fuerzas armadas. El Partido Liberal ha sido el de enfrente, el de la oposición, el de los derechos humanos, el de las libertades públicas, el del exilio, el de las cárceles, etc., el que ha seguido siendo fiel a todo esto, sufriendo por combatir el statu quo que tenía enfrente con poderes reales y muy fuertes.”

²⁹ <http://www.proceso.hn/2008/10/09/Nacionales/Congreso.Nacional.aprueba/8877.html>

³⁰ Es importante indicar que Zelaya nunca manifestó su voluntad de continuar en el poder.

³¹ Zelaya logro fundar dos medios de comunicación estatales que no pudieron contrarrestar el poder mediático privado.

Ese clima de deslegitimación fue avalado y amplificado por las corporaciones empresariales, las cuales que debieron aceptar a regañadientes, entre otras cosas, el aumento del salario mínimo y un mayor ingreso público destinado a la provisión de comida gratuita en las escuelas (principalmente, en las rurales); como la Iglesia debió aceptar el veto a la propuesta de la Asamblea Nacional de prohibir la utilización de la denominada “píldora del día después”.

Los grupos mediáticos encontraron en la adhesión al ALBA y en la figura de Chávez dos significantes que podían articular a la elite política, empresarial, militar y eclesial contra el presidente Manuel Zelaya. De tal forma, estos grupos construyeron dicho “clima” que sectores del Partido Liberal entendieron que era la oportunidad para enfrentar abiertamente al Presidente. Roberto Micheletti –presidente del Congreso y miembro del Partido Liberal- que había logrado el apoyo para la adhesión al ALBA y, a su vez, que deseaba posicionarse para la sucesión presidencial³² decidió colocar a la bancada liberal en franca disputa con las políticas de Zelaya. Esto tuvo sus efectos inmediatos. Se cuestionó y frenó el proyecto de presupuesto del año 2009 presentado por el presidente y, por otro lado, a Zelaya se le prohibió colocar un candidato propio para la elección de autoridades judiciales –Corte Suprema, Ministerio Público, Fiscal General y el Tribunal Supremo Electoral-, quedando la selección de los mismos en manos del espacio de Micheletti y del Partido Nacional. Por lo tanto, ya comenzaba a delinearse una estrategia común entre ambos partidos, que terminará con el aval al golpe de Estado.

2009 es el año de los más importantes acontecimientos. En enero, el conflicto estuvo signado por la propuesta de reforma constitucional y la “cuarta urna” (ya quería agregar una urna más a las tres previstas para la elección de presidente, parlamentario y alcalde) para elegir Constituyentes. Esto disparó todas las especulaciones sobre la “perpetuación y chavización” de Zelaya y profundizó y desató un significativo conflicto con el Congreso y su partido. Debido a esto, impulsó – a través de un decreto del 23 de marzo de 2009- una <consulta> popular que tendría lugar en junio, donde se solicitaría a los votantes la aprobación o no de un referendo destinado a convocar una Asamblea constituyente que se realizaría simultáneamente con las elecciones de noviembre de 2009.

Manuel Zelaya, de esta manera, entendía que se debían buscar y construir apoyos por fuera del sistema partidario. De esta manera, indagaría las maneras de sortear las redes institucionales de los partidos y forjar una nueva vía de legitimación.

El conflicto con el Congreso y los partidos liberal y nacional se agravó cuando el Ministerio Público impugnó el decreto y el Juzgado Contencioso Administrativo lo suspendió. De esta manera, distintos poderes del Estado presionaban y buscan detener la acción presidencial. Una forma de sortear dicha obstaculización fue establecer un nuevo decreto, el 26 de marzo de 2009, donde se modificaba la palabra <consulta popular> por <encuesta nacional>.

Este intento fue nuevamente frenado por el Juzgado Contencioso Administrativo, quien ordenó a los militares confiscar los materiales de la Encuesta. Por tanto, el Juzgado no solo ordenaba a la fuerza militar llevar adelante una acción confiscatoria de materiales

³² Si bien en el año 2001 se firmó un acuerdo entre Presidente de la Nación y Presidente del Congreso, donde este último se lo inhiba de participar personalmente en las elecciones presidenciales. Pero en el 2008, la Corte Suprema declara inconstitucional dicho acuerdo, lo cual le permite a Micheletti a presentarse como candidato y a acumular los mayores recursos y lealtades para su candidatura presidencial. Estas ambiciones, exacerbarían el conflicto entre Zelaya y el presidente del Congreso.

electorales, sino que introducía y legitimaba la presencia de los militares en el conflicto político e institucional.

Un sector del Partido Liberal -dirigido por Roberto Micheletti- y el Partido Nacional aprovecharon esta crisis para plantear que Zelaya buscaba atentar contra el régimen democrático. Lo interesante a destacar, es que en los últimos años en América Latina los intentos de reformulaciones (o transformaciones) del orden político son presentados por las derechas latinoamericanas –con representación en los parlamentos, como en las cámaras empresariales- como intentos “antidemocráticos”. Es decir, toda impugnación o crítica a la trama de poder que estructuró el neoliberalismo es presentada, no como un avance sobre sus intereses, sino como un “avance sobre la democracia”. Las políticas públicas orientadas hacia el bien común son catalogadas como autoritarias o arbitrarias.

El Congreso se sumó a los poderes que buscaron obstaculizar la encuesta nacional para el 28 de junio de 2009, para ello, el 24 de ese mes aprobó una ley que declaraba que no podía realizarse ningún referéndum 180 días antes o después de elecciones regularmente programadas. Así los partidos tradicionales advertían –con dicha ley- que se habían constituido en un “contrapoder” a las decisiones del Presidente y que se negaban absolutamente a aceptar una encuesta nacional que indague una forma de construcción de la adhesión política del Presidente por fuera de los parámetros de los partidos tradicionales. Una trama de poderes institucionales coaligados con intereses corporativos (empresas, arzobispado y militares) se enfrentó a una lógica de acción que el Presidente había planteado unos años antes y que se articulaba alrededor de la encuesta nacional.

El paisaje político se fue transformando y articulando rápidamente, se presentaba una escenografía institucional que manifestaba un ánimo destituyente y disciplinatorio contra el Presidente. Inclusive, los militares apelando a los dictámenes del Juzgado Contencioso Administrativo decidieron no proveer la logística para la encuesta presidencial, dejando sin infraestructura operativa a la misma. Zelaya, el 24 de junio, despidió al Jefe del Estado Mayor, general Vásquez Velásquez y un día después fue obligado por la Corte Suprema a reinstalarlo en su cargo, a lo cual, el Presidente se negaría días más tarde. Ante estos acontecimientos, Zelaya decidió –en su estrategia por sortear al bipartidismo- apelar a sus seguidores para recuperar el material electoral que se encontraba confiscado en la base aérea de Tegucigalpa.

La Corte Suprema de manera secreta ordenó –el 26 de junio de 2009- el arresto militar del Presidente. El mismo fue realizado el 28 de junio pero no fue conducido a una cárcel militar, sino que fue sacado en pijamas de su residencia y expulsado a Costa Rica³³. Con lo cual, se violaba la Constitución hondureña y se lo negaba –en el caso, de poseer cargos- de un juicio justo.

La expulsión a Costa Rica y el “destierro” del sistema político fue apoyada y avalada por el Partido Liberal y Nacional, los cuales –el mismo día 28- nombran al Presidente del congreso – Roberto Micheletti- como sucesor de Zelaya. El Partido Liberal voto contra su propio presidente y reunió los votos de todos su diputados (62), mientras que el Partido Nacional apoyo el traspaso con 55 votos, logrando un amplio apoyo al golpe y a la sucesión con unos 117 votos de 128 que integran el parlamento³⁴. Es decir, la corporación partidaria

³³ Es importante indicar que no fueron directamente a Costa Rica, sino que los militares hicieron una parada en Palmerola (base militar de los Estados Unidos en Honduras)

³⁴ Como en el caso del intento del Golpe a Chávez (2002), se planteó que existía una renuncia de Mel Zelaya a su cargo.

–apelando a las intenciones de Zelaya de clausurar el Congreso y de orientarse hacia el chavismo- avaló el golpe y el destierro del Presidente y, a su vez, dirigió una sucesión como si no hubiese pasado nada.

Las derechas políticas y empresariales en Honduras encontraron en el parlamento y en otras instituciones recursos para el bloqueo, presiones y desafíos al Presidente Zelaya. Hicieron valer todas sus representaciones, como el control de diversas instituciones para clausurar una alternativa a lo que había establecido el bipartidismo de 1982. Es decir, el golpe contra Zelaya habla más de la crisis del bipartidismo provocada por las reformas neoliberales y de un resquebrajamiento de la lógica discursiva de la Doctrina de Seguridad Nacional por parte de un sector de la clase política -el sector que apoyo a Zelaya- que de un fortalecimiento de las estructuras partidarias. Las derechas hondureñas articularon –ante la figura de Zelaya- las estructuras discursivas e ideológicas provistas por neoliberalismo y el anticomunismo. De esta manera, queda demostrado que no hubo una sustitución del comunismo por el neoliberalismo –como indicaba Joan Font Fábregas (1998) para las derechas centroamericanas- sino que se mantuvieron como “lenguajes disponibles” que las derechas utilizaron y reactualizaron para derrocar a Zelaya.

La efectividad del golpe y de su articulación discursiva en un primer momento no contaron que surgiría, en la resistencia al golpe, un actor que hablaría y profundizaría dicha crisis del bipartidismo: el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP).

El FNRP fue algo inédito, sobre todo, conociendo la histórica debilidad y fragmentación de organización de los movimientos políticos, campesinos y sindicales. Entre sus acciones, debe considerarse una muy significativa: la deslegitimación de los actores que apoyaron y organizaron el golpe de Estado. De hecho, éstos a diferencia de otros sucesos debieron responder a una política comunicacional y urbana que los sindicaba como actores centrales del golpe de Estado y cómplices de la situación político y social del país. Por esto, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) debió realizar un texto denominado “Documento de Posición” del 19 de agosto de 2009, donde indicaba las impugnaciones, burlas y críticas que habían recibido luego del golpe³⁵. La visibilizarían y la puesta en juego su legitimidad social empujó al consejo empresarial a reconstituir su posición frente a los sucesos, reivindicando una posición neutral frente a la “política”. El COHEP, indica que luego del 28 de junio, se ha registrado la “emergencia de un clima hostil hacia la propiedad el cual se ha hecho manifiesto a través de publicaciones alusivas a la participación del sector privado en la destitución del Sr. Jose Manuel Zelaya Rosales. Progresivamente, las manifestaciones relativamente anodinas de la oposición, principalmente plasmadas mediante inscripciones realizadas con pintura en las paredes (i.e. grafitti) o distribuida a través de la mensajería electrónica, dirigidas a las entidades representativas del sector, se fueron transformando en amenazas, ataques a la integridad física, discriminación racial, ataques a los centros de trabajo y a los centros educativos, dirigidos directamente a la figura del empresario o del directivo empresarial.” (COHEP, 2009: 7) En este documento podemos observar cómo se contesta a diversos ataques simbólicos y políticos que inician los que resisten al golpe.

El Arzobispado debió, a su vez, responder a aquellos que los vinculaban al golpe. De hecho, el 12 de julio de 2009, Oscar Rodríguez Madariaga indicaba en La Vanguardia (España): “no soy un cardenal golpista.”³⁶

³⁵ <http://www.cohep.com/pdf/Documento%20Juridico%20COHEP%2019%20Agosto%202009.pdf>

³⁶ <http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2009/07/12/pagina-13/78460042/pdf.html>

Los únicos actores que mantuvieron su posicionamiento sobre la destitución de Zelaya fueron los partidos tradicionales y los militares, creyeron que la realización de elecciones presidenciales (en noviembre de 2009, mantenido las fechas establecidas antes del golpe) clausuraría la crisis. Pero, conformación del Frente Nacional de la Resistencia contra el Golpe de Estado y, luego, Frente Nacional de la Resistencia Popular cambiaría la escenografía del conflicto político en Honduras y al interior de su sistema político.

FNRP, Partido Libre y liderazgo de Xiomara Castro

"Nosotros tenemos el ADN Popular no como ellos que son herederos del Golpe de Estado"
José Manuel Zelaya Rosales

El rechazo al golpe provocó una movilización ciudadana sin precedentes en la historia hondureña, esa acción inédita estaba vinculada a lo logrado y prometido por Zelaya pero, a su vez, con las insatisfacciones que muchos entendían que con el “gobierno de los golpistas” –en este caso el Roberto Micheletti- éstas no se iban a resolver. Esta movilización y resistencia (donde mayoritariamente participaron jóvenes y mujeres) fue organizada por actores sociales y políticos que darían forma, primero al Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado (FNRCGE) y, después del 29 de noviembre de 2009, Frente Nacional de Resistencia Popular. Este actor –creado en el proceso de rechazo al golpe- es el nuevo protagonista colectivo que surge en el contexto de crisis que abre el golpe y la represión de las fuerzas de seguridad. Si bien el día del golpe no se suscitó inmediatamente la participación ciudadana –porque esta no sabía lo que había sucedido-, fue organizándose los días posteriores.

El Frente Nacional (en sus dos denominaciones) tuvo la capacidad de articular y organizar a diversos colectivos, como a ciudadanos y ciudadanas jóvenes –principalmente desafiliados- y otorgarle una viabilidad política al proceso de resistencia. Éste dirigió el rechazo al golpe, el cual, según la encuesta del Latinobarómetro de 2009, fue impugnado por el 58% de la población.

El Frente se transformó en un *laboratorio de construcción de poder social y político* que se fundamentó en la impugnación al quiebre del orden constitucional y en la reivindicación de las políticas más rupturistas de Zelaya. Es decir, se reivindicaba el intento por vincular *régimen democrático* con la *realización (o promesa de realización) de expectativas populares*, desarticulando así progresivamente una idea neoliberal que solo reivindicaba a la democracia como conjunto de reglas, alternancias y plataforma jurídica para la libertad de mercado.

A su vez, existían otras reivindicaciones que se apropiaba el Frente Nacional del gobierno de Zelaya: por un lado, el intento por construir desde el Estado y por “fuera” de las redes tradicionales del Partido Liberal, un lazo con los sectores excluidos (aumento del salario mínimo) y, por otro, el límite y disputa a elites tradicionales ante su intento por controlar ámbitos estratégicos (redujo la ganancia de los transnacionales de combustibles y beneficio a los consumidores, la negativa a privatizar la Empresa Nacional Portuaria; la adhesión al ALBA-Petrocaribe) y la decisión de construir un aeropuerto internacional en Palmerola (es

decir, en la base militar estadounidense en el centro del país). De esta manera, Zelaya ofrecía una memoria y práctica posible de afectación de intereses a las élites locales y transnacionales, lo cual fue construyendo una adhesión entre sectores populares, sindicales y sociales que luego del golpe contribuyeron en la afirmación del FNRP. A su vez, ofrecía una mirada que insistía en que el mercado por sí solo no podía integrar a la sociedad hondureña y que para ello, debía pensarse en un Estado redistribuidor (Cálix: 2010: 416).

Carlos Humberto Reyes, dirigente sindical, define de esta manera al gobierno de Zelaya: “Aunque Mel proviene de la oligarquía, se dio cuenta como presidente de que había que hacer algunas reformas. Y no dejaron que las hiciera. No te voy a decir que Mel es un revolucionario. No. Pero es uno de esos fenómenos que se dan cuando tu llegas como jefe de Estado de un país, en donde la presidencia tiene un bajo perfil, y la persona que llega, que es un orgulloso de la burguesía, siente que los demás burgueses lo quieren aplastar y al ver a un pueblo jodido se dice ‘a ver qué se hace’. Eso no es ningún pecado, es una acción correcta, valiente, de una persona” (El Proceso, 2008)³⁷.

El Frente capitalizó la resistencia y la crisis que abrió del golpe de estado, se fue afirmando como fuerza política, logró interpelar a los diversos sectores sociales y, además, produjo una fuerte deslegitimación de los actores involucrados con el derrocamiento de Zelaya. Entonces, mientras las derechas transformaron la “cuarta urna” en un signo demostrativo hacia donde se dirigía Zelaya e interpeló a una porción de la sociedad hondureña; el FNRP articuló todas las críticas al neoliberalismo y al bipartidismo en el “rechazo al golpe”. Es decir, el FNRP –a diferencia del luguismo en Paraguay³⁸- fue una alternativa política que transformó una “derrota” infringida por los golpistas, en una “victoria” organizativa a futuro. A su vez, existe otra diferencia con el golpe a Lugo en Paraguay y es que desde el primer día de ausencia del presidente Zelaya, empezaron las movilizaciones. Utilizando una metáfora de Lorena Soler (2012: 23-30), podemos indicar que, a diferencia de lo sucedido en Paraguay, la “plaza” no estaba vacía, sino que se empezaba a congregarse de actores y de movilizaciones. Como indica Cálix (2010: 419), las movilizaciones sociales contra el golpe deben ser comparadas con aquellas de 1954 que suscitaron la huelga de obreros de las compañías bananeras para lograr diversas reivindicaciones.

Uno de los procesos paralelos a las manifestaciones callejeras fue la deslegitimación simbólica y cultural del COHEP, de las fuerzas militares y del Arzobispado de Tegucigalpa, acciones que erosionaron principalmente a los partidos tradicionales. De esta manera, el FNRP introduce una novedad política en la historia de este país: la capitalización y profundización de la deslegitimación de los partidos tradicionales y éstos significaron para la historia reciente de Honduras. El FNRP pudo iniciar la construcción de una interpretación sobre el golpe, en la cual, tanto el Partido Liberal, como el Partido Nacional quedaba vinculados a éste. De esta manera, ambos partidos comenzaron a “pagar el costo político” y a sufrir una significativa erosión.

La participación de jóvenes y mujeres fue significativa entre los que rechazaban y resistían al golpe y el nombramiento de Roberto Micheletti, como nuevo Presidente. La represión iniciada por las fuerzas de seguridad contabilizó treinta ejecuciones, hostigamiento y tres mil detenciones arbitrarias. Según, Cálix (2010: 421), “desde el 28 de junio hasta el 29 de noviembre (fecha en las que se realizaron las elecciones generales previstas por el calendario electoral), transcurrieron aproximadamente 150 días de protestas continuas...”

³⁷ <http://www.proceso.hn/2008/10/09/Nacionales/Congreso.Nacional.aprueba/8877.html>

³⁸ Ver Lorena Soler (2012: 23-30)

Éstas –como advertimos más arriba- se fueron institucionalizando y organizando de manera continua lo que dio origen al Frente Nacional de Resistencia Popular. Es decir, esta experiencia política pasó del rechazo al golpe a la construcción de un actor político con voluntad de dirigir el Estado hondureño.

El Frente congregó diversos colectivos, incluso algunos que estaban en contra de la gestión de Zelaya. Este conglomerado de actores políticos se reunió en torno a dos propósitos: por un lado, el retorno al orden constitucional y, por otro, el establecimiento de una Asamblea Nacional Constituyente que incorpore a los sectores excluidos a las decisiones estratégicas de un nuevo Estado. Pero, a su vez, asumió otros objetivos muy significativos, como pedir a sus bases que no voten el 29 de noviembre a ninguna fórmula presidencial, como el de sustraer el conflicto político de la clave comunismo (chavismo)-capitalismo que las derechas hondureñas pretendieron insistir y recrear. Es decir, el FRNP logró movilizar voluntades en una elección, resistir los fundamentos de las derechas para derrocar a Zelaya y colocar el debate en las condiciones reales del orden político hondureño.

El 29 de noviembre sucedieron tres cosas importantes: 1. el Partido Liberal –promotor del Golpe- perdía las elecciones por una diferencia abultada con el Partido Nacional y su candidato, Porfirio Lobo (triumfo por más de 20 puntos). Es decir, el partido que se percibió como promotor central del golpe fue amonestado por el electorado³⁹; 2. el triunfo del Partido Nacional se produce en un contexto de deslegitimación del bipartidismo, de importante ausentismo electoral que no se observaba desde 1981 (solo participó en 2009 un 50%⁴⁰) y de resistencia al golpe y 3. la consolidación del FNRP como fuerza política con capacidad nacional.

En el proceso de resistencia se fortalecieron diversos actores que integraban el FNRP y esto dio lugar a una fuerza cohesionada y a la institucionalización de liderazgos. Zelaya alentó al Frente, siempre intento mantenerse cerca de éste y conducirlo con otros dirigentes⁴¹. También su “acercamiento” fue central, ya que lentamente fue ganando parte del “electorado” liberal que no adhería a la estrategia golpista del Partido Liberal, como también logró la adhesión de sectores de este partido que no avalaron internamente el derrocamiento de Zelaya.

En este proceso de resistencia se va consolidando el liderazgo de Xiomara Castro⁴² (esposa de Mel Zelaya y empresaria) y, de manera simultánea, el FNRP se transforma en una propuesta partidaria alternativa al bipartidismo y a la cultura neoliberal. En esta experiencia surgen con fuerza el liderazgo de Xiomara Castro –quien había apoyado y participado en la resistencia al Golpe mientras Zelaya se encontraba fuera del país- y el Partido Libre (Libertad y Refundación).

La propia presencia de Xiomara Castro en el sistema político es de una significancia suprema, sobre todo, en una clase política machista. Nació en 1959. Es esposa del derrocado presidente hondureño Manuel Zelaya. Su vínculo con la política no fue a través

³⁹ Lo mismo sucedería el 21 de abril de 2013 en Paraguay. El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) que era aliado de Fernando y que apoyó y fomentó su destitución es derrotado en las elecciones en manos del Partido Colorado.

⁴⁰ Aunque antes de esta comunicación final, el poco transparente del Tribunal Supremo Electoral advertía que había participado el 61% de la población.

⁴¹ El 21 de septiembre de 2009, Zelaya regreso y se instaló en la Embajada de Brasil. El 27 de enero de 2010 –día que terminaba oficialmente su mandato como Presidente- recibe un salvoconducto para viajar a República Dominicana.

⁴² Nace el 30 de septiembre de 1959.

de su marido. Posee una importante experiencia militante. Ella organizó un espacio de mujeres del Partido Liberal en el año 2005 e impulsó a su esposo para que sea elegido como candidato presidencial. Es decir, tanto Xiomara Castro, como Mel Zelaya provienen de las filas del Partido Liberal y de aquellos sectores partidarios que promovían la realización de reformas políticas en un país signado por la exclusión (pobreza, desigualdad, inseguridad, etc.). Luego del derrocamiento de su marido, Xiomara reafirmó su liderazgo en la organización de la resistencia al golpe y en la construcción de una fuerza política. Cuando Zelaya regreso al país y sabiendo que sería imposible su restitución advirtió: “La que está en política es la primera dama, yo soy un simple ciudadano”. El “retiro” de Zelaya de la escena política fue clave en términos políticos. Primero, mostraba que no persistía en su restitución, ni en su continuidad en el poder, como había planteado la derecha hondureña. Segundo, apoyaba a una líder que era avalada en el proceso de resistencia y que recibía apoyos de liberales desencantados con el Partido Liberal, de ciudadanos/as “fatigados” del bipartidismo y de sectores excluidos.

A su vez, Xiomara Castro reafirmó su liderazgo frente a otras organizaciones sociales, las cuales, hoy consideran que un gobierno dirigido por ella puede reparar las desigualdades urbanas y asistir a campesinos asediados por la expulsión territorial y la concentración de tierras. Entre los pequeños campesinos o trabajadores rurales reina la precarización, la insuficiencia de apoyos económicos, la debacle social frente a las grandes concentraciones de tierra que exportan sus productos a los EEUU y, sobre todo, la violencia social sobre los campesinos y sus organizaciones.

Xiomara Castro y su Partido Libre han cosechado algunos triunfos. En las elecciones internas para elegir candidatos a presidentes en todos los partidos (18/11/2012), ella logró más votos que los candidatos a presidente de los partidos tradicionales. Mientras para la candidatura de Xiomara fueron 563.162, Mauricio Villeda y Juan Hernández se llevaron 322.627 (Partido Liberal) y 446.230 (Partido Nacional) respectivamente. En esa elección, también fue presentado en el sistema de partidos, el Partido Libertad y Refundación (Partido Libre). Con este espacio se presentará el 24 noviembre de 2013 para competir por la presidencia de Honduras. Los términos “Libertad” y “Refundación” anudan dos metáforas políticas de las propuestas de Xiomara Castro que impactan contra aquellos partidos tradicionales que han subordinado sus propuestas al neoliberalismo. La idea de “libertad” posee dos articulaciones: una, libertad asociada a la construcción de un Estado soberano y, dos, libertad (individual y colectiva) garantizada por el orden estatal renovado. La concepción de “Refundación” apunta a la transformación de la sociedad y del Estado, a la búsqueda de mayores cuotas de igualdad social y de participación, garantizadas por la elaboración de una nueva constitución. A su vez, “refundación” implica para el Partido Libre la construcción de un modelo económico y político alternativo al estructurado por el bipartidismo y la consolidación de una nueva elite política.

En la actualidad, el Partido Libre experimenta un importante crecimiento político y social, lo cual, advierte que el golpe de 2009 contra Zelaya no pudo clausurar voluntades ciudadanas, políticas y sociales que aspiran a mejorar sus vidas. Hoy Xiomara Castro empieza articular nuevas expectativas y otras fundadas por Manuel Zelaya y a mostrar un espacio progresista decidido a refundar la sociedad hondureña y a replantear nuevos acuerdos regionales, fundamentalmente, con los gobiernos de América del Sur. Su apelación al socialismo, como a diversas referencias religiosas –muy propias de la sociedad hondureña- coloca al Partido Libre en ese horizonte político que suscitó el proyecto bolivariano. Este partido, fundado en octubre de 2011, se inscribe en las perspectivas de

izquierdas y progresistas desarrolladas en los últimos años en América del Sur. Sobre todo, en aquellas experiencias políticas que han propuesto reformas constitucionales para la remodelación del orden estatal. Este partido busca construir –y esa es su gran promesa- una nueva temporalidad estatal y, sobre todo, organizar la “fatiga y exclusión social” que se ha generado desde la recuperación democrática.

En Honduras, se produjeron varias situaciones inesperadas desde 2005. Entre ellas, la construcción del liderazgo de Zelaya en su conflicto con las élites políticas y empresariales, la resistencia ciudadana al golpe, la consolidación de la figura de Xiomara Castro y de una nueva elite política⁴³. A su vez, todo ello fue construyendo una propuesta de país centrada en la transformación de las condiciones excluyentes y en el límite de los efectos de la economía globalizada. Una propuesta, que a diferencia de otras, que está lejos de estructurarse sobre la lucha contra las pandillas y la inseguridad.

El 31 de marzo de 2013, la encuestadora Paradigma indicaba que Xiomara Castro encabezaba con un 23% los sondeos para las elecciones presidenciales⁴⁴. A su vez, indica que existe un percepción mayoritaria (77%) de que el Partido Liberal se encuentra desunido frente al proceso electoral. Los primeros días de abril de 2013, la encuestadora Le Vote mostraba que Xiomara Castro seguía liderando las encuestas presidenciales con un 30%. Lo interesante de estos sondeos, es que se advierte que un 11% de liberales apoyan su candidatura. Estas mediciones muestran otra cuestión significativa y es aquella que coloca en segundo lugar Salvador Nasralla (28%) del Partido Anticorrupción (PAC). Lo cual, demuestra que las dos opciones nuevas, la del Partido Libre, como la PAC –de centroderecha-, han desplazado –por el momento- a los partidos tradicionales⁴⁵. Nasralla es periodista y proviene de la televisión hondureña y si bien apoya la “libre empresa”, en su propuesta ha agregado que esta puede limitarse por el interés social o la seguridad nacional. Si bien puede ser parte de su estrategia discursivo, no hace otra cosa que acusar recibo de lo que produce un “capitalismo” desbocado por los intereses empresariales. También Nasralla se ha apropiado del término “anticorrupción” y transparencia –propios del vocabulario neoliberal- e intenta representar a un sector de la sociedad que percibe que la política esta minada por la corrupción.

Las elecciones de noviembre de 2013 pueden mostrar una nueva escenografía electoral y del poder político en Honduras. En esta contienda se presentaran un total de 9 partidos políticos, de los cuales solo los cuatro primeros estarán entre los competidores reales a la presidencia⁴⁶.

Más allá del triunfo o derrota electoral de Xiomara Castro en noviembre de 2013, su fuerza política desarmará –tal vez, junto a PAC- el bipartidismo y lo que éste ha implicado en la historia política de Honduras. Su liderazgo se ha transformado en una promesa de cambio y en una posibilidad cierta de trastocamiento del statu quo. La resistencia al golpe y la

⁴³ En relación a esta nueva elite, debemos indicar que el Partido Libre construye candidaturas al parlamento y en todos los territorios (alcaldes) de Honduras.

⁴⁴ En el segundo puesto se encontraba Juan Orlando Hernández (18%, PN); tercero Mauricio Villeda Bermúdez (11%, PL) y cuarto, Salvador Nasralla (9%, PAC). Ver http://www.encuestadoraparadigma.com/index.php?q=img_assist/popup/154

⁴⁵ En el tercer lugar se encuentra Juan Orlando Hernández (26%, PN) y cuarto Mauricio Villeda Bermúdez (16%, PL). Ver <http://www.levotehonduras.com/>

⁴⁶ Los otros partidos son: Partido Demócrata Cristiano (PDC), Partido Innovación y Unidad (PINU), Partido Alianza Patriótica (PAL), Unificación Democrática (UD) y Frente Amplio Político Electoral en Resistencia (Faper).

articulación de diversos sectores sociales pueden llevarla a la Presidencia, como también pueden conducir a una mujer a minar uno de los bipartidismo más largo de América Latina y a desafiar un sistema político-social excluyente y también –profundamente- machista.

A modo de conclusión. Los últimos acontecimientos

Xiomara Castro nació en 1959, perteneció al Partido Liberal y actualmente es la candidata, con mayores chances, para lograr la presidencia de Honduras en las elecciones de noviembre de 2013. Es esposa del derrocado presidente Manuel Zelaya, pero su trayectoria política no tiene relación con ese vínculo filial. Ella no es una *outsider*, sino una dirigente que se ha “hecho” en diversas disputas y coyunturas. Organizó –en 2005- un espacio de mujeres del Partido Liberal desafiando al machismo político y fue una activa militante para lograr que Zelaya arribe a la presidencia. A su vez, con el golpe de 2009, Xiomara Castro se sumó, primero a la organización del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado y, luego, en el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), el cual fue integrado por diversos movimientos sociales, por miembros del Partido Liberal descontentos con el golpe y por un conjunto de ciudadanos y ciudadanas –centralmente, jóvenes y mujeres- fatigados por un régimen político y económico excluyente. Construyó su liderazgo en la resistencia al golpe y en la articulación de diversos descontentos sociales contra un orden neoconservador. Fundó, en 2011, el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), lo cual provocó la redefinición del sistema político y estableció una novedad histórica y radical: el Partido Libre se introdujo entre los actores que compiten por la presidencia, desafiando así un bipartidismo de más de cien años. Es decir, a diferencia de lo que ocurrió con Aristide en Haití y Lugo en Paraguay, los actores que sufrieron el golpe, lograron conducir y “capitalizar” la crisis y resistencia que ese hecho suscitó. Construyeron una fuerza política y nuevas dirigencias. Diseñaron una campaña electoral de alcance nacional, comenzaron a construir políticamente en los territorios e instituyeron y legitimaron nuevos referentes.

Xiomara se transformó en un “liderazgo inesperado” –al igual que Zelaya- para la elite empresarial y política de la cual provenía, pero también para la dirigencia política de América del Sur. Ambos consolidaron sus figuras en las críticas al bipartidismo (uno de los más largos de América Latina) y a las corporaciones que representa; al elitismo político poco afecto a la participación ciudadana; al alineamiento con los Estados Unidos y a las maneras de comprender el conflicto social que había legado la Doctrina de Seguridad Nacional y que fue reactualizada para asociar a Zelaya con un “juguete” del chavismo. El debate que el Partido Libre y Xiomara Castro proponen en la campaña electoral no está ceñido a la “agenda securitista”, sino a la refundación de un Estado capaz de intervenir en la economía para lograr mayores cuotas de igualdad (en uno de los países más desiguales de la región) y de regular flujos de capitales que empujan a la concentración de tierras, al desempleo rural, al empobrecimiento y a la financierización de la economía. Se ha sustituido el debate sobre las “maras” o pandillas –tan propio de las agencias del Norte-, por la necesidad de establecer una Asamblea Constituyente que instaure otra sociabilidad política. Si bien las derechas golpistas que controlan el Partido Liberal y el Partido Nacional creyeron que el derrocamiento de Zelaya “volvería a equilibrar” el sistema político, lo único que lograron fue su contrario. El golpe de Estado cerró el ciclo de “estabilidad” inaugurado por la llamada “transición a la democrática” (1982) y develó –de manera acelerada- las desafilaciones al sistema político y al viejo bipartidismo que la

“brutalidad” neoliberal había provocado. De hecho, la poca confianza al sistema político bipartidista se articuló con un mayoritario rechazo al golpe de Estado.

Xiomara Castro es parte de un proceso que transita del rechazo al golpe al establecimiento de un proyecto político. En éste estableció un repertorio discursivo que se sustrae de las agendas neoliberales y geoestratégicas hegemónicas, que se anima a resignificar memorias de lucha –como la huelga del banano de 1954- y que – pese al golpe y a su deseado disciplinamiento- se inscribe en el ciclo de cambios políticos y estatales que abrieron el chavismo y los gobiernos progresistas para América del Sur. La experiencia del Partido Libre, como la de Xiomara Castro, implica también una relectura de aquellas tradiciones y perspectivas políticas que pueden lograr de manera eficaz ampliar legitimidades y adhesiones y, sobre todo, construir mayorías antineoliberales.

Bibliografía

Ansaldi, W. y Giordano, V. (2012) *América Latina. La construcción del orden. Tomo II De las sociedades de masas a las sociedades en procesos de reestructuración*. Buenos Aires: Ariel.

Achard, D. y Flores, M. (1997) *Gobernabilidad: Un reportaje de América Latina*. México: PNUD/FCE.

Barahona, M. (2005) *Honduras en el siglo XX. Una síntesis histórica*. Tegucigalpa: Guaymuras.

Barahona, M. (2010) Estado oligárquico, crisis política y corrupción pública, en Joaquín Mejía R. y Víctor Fernández (Coordinadores) *El golpe de Estado en Honduras desde una perspectiva de los derechos humanos*. Tegucigalpa: Guaymuras.

Cálix, A. (2010) Honduras: de la crisis política a la emergencia de un nuevo actor social, en Joaquín Mejía R. y Víctor Fernández (Coordinadores) *El golpe de Estado en Honduras desde una perspectiva de los derechos humanos*. Tegucigalpa: Guaymuras.

Fábregas, J. (1998) Las derechas centroamericanas: del comunismo al neoliberalismo, en Ana Cardenal y Salvador Martí i Puig (compiladores) *América Central, las democracias inciertas*. Madrid: Tecnos.

Fernández, R. (2010) Bipartidismo, pobreza y golpe de Estado, en Joaquín Mejía R. y Víctor Fernández (Coordinadores) *El golpe de Estado en Honduras desde una perspectiva de los derechos humanos*. Tegucigalpa: Guaymuras.

Funes, M. (2000) *Los deliberantes: el poder militar en Honduras*. Tegucigalpa: Guaymuras.

Mejía R., J. y Fernández, V. (Coordinadores) (2010) *El golpe de Estado en Honduras desde una perspectiva de los derechos humanos*. Tegucigalpa: Guaymuras.

Rouquié, A. (2011) *A la sombra de las dictaduras. La democracia en América Latina*. Argentina: FCE.

Sojo, C. (1995) “Gobernabilidad y ajuste en Centroamérica”, en Revista Nueva Sociedad Nro. 139. Julio-Ago. Buenos Aires. PP. 16-22

Soler, L. (2012) Lugo: el palacio y la plaza, en Rocco Carbone y Lorena Soler (Eds) *Franquismo en Paraguay. El golpe*. Buenos Aires: El 8vo. Loco ediciones

Zanatta, L. (2012) *Historia de América Latina. De la Colonia al siglo XXI*. Argentina: Siglo Veintiuno/Fundación Osde.

